



# Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general  
2 de enero de 2014  
Español  
Original: inglés

---

## Comité de los Derechos del Niño 60º período de sesiones

### Acta resumida de la 1710ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el miércoles 6 de junio de 2012, a las 10.00 horas

*Presidente:* Sr. Zermatten

## Sumario

Examen de los informes de los Estados partes (*continuación*)

*Informes periódicos segundo y tercero combinados de Grecia*

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-43319 (S) 311013 020114



\* 1 2 4 3 3 1 9 \*

Se ruega reciclar



*Se declara abierta la sesión a las 10.00 horas.*

**Examen de los informes de los Estados partes (continuación)**

*Informes segundo y tercero combinados de Grecia (CRC/C/GRC/2-3; CRC/C/GRC/Q/2-3 y Add.1)*

1. *Por invitación del Presidente, la delegación toma asiento a la Mesa del Comité.*
2. **El Sr. Georgakopoulos** (Grecia), presenta los informes periódicos segundo y tercero combinados y dice que los desafíos que afronta su país, debido a la crisis financiera, al aumento de la migración y a otros factores externos, no socavan en absoluto su compromiso de defender los derechos del niño ni van a impedirle prevenir y eliminar las prácticas que dejan a los niños en una situación desfavorecida, castigar las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención, promulgar reformas administrativas y mejorar el bienestar de los niños y los mecanismos establecidos para su protección.
3. La política de educación adoptada por el Gobierno de Grecia tiene tres objetivos generales, a saber, garantizar unos servicios de educación de alta calidad y accesibles para todos, atender la necesidades específicas de todos los niños y eliminar la exclusión; además, los derechos enunciados en esa política están garantizados para todos los niños que viven en Grecia independientemente de su nacionalidad y situación jurídica, incluso si no disponen de documentación completa. Se han elaborado también programas específicos de integración educativa para determinados grupos vulnerables y minoritarios. Por ejemplo, los estudiantes inmigrantes y repatriados se benefician de un programa nacional de apoyo a la enseñanza primaria y secundaria destinado a reducir las tasa de abandono escolar, mejorar el rendimiento, luchar contra la exclusión social y, en la medida de lo posible, eliminar la segregación. Un programa similar para los niños romaníes hace especial hincapié en la lucha contra los prejuicios y el fomento de la educación preescolar, la matriculación a una edad temprana, y la asistencia regular. El programa para niños pertenecientes a la comunidad musulmana cumple las directrices elaboradas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y tiene por objeto tanto mantener y mejorar las escuelas para minorías que cuentan con el apoyo del Estado y funcionan en Tracia, como adaptarse a la creciente preferencia de la minoría musulmana por la educación inclusiva, salvaguardando al mismo tiempo las diferencias lingüísticas y culturales.
4. Entre otras iniciativas del Gobierno para luchar contra la segregación y sus consecuencias cabe citar la adopción en 2010 de la política de zonas de prioridad educativa, en cuyo marco se elaborarán y pondrán a prueba enfoques educativos alternativos y flexibles en zonas definidas como prioritarias sobre la base de sus bajos indicadores socioeconómicos y de educación, con miras a asegurar la inclusión educativa equitativa de los alumnos que viven en esos lugares y de eliminar los obstáculos que impiden su progreso. Además, una ley relativa a la educación para personas con discapacidad y necesidades especiales, de 2008, dispone que los programas especiales de enseñanza, destinados a alumnos superdotados y talentosos así como a alumnos con discapacidad o dificultades de aprendizaje, deben formar parte integrante de la escolarización estatal obligatoria y que la educación incluyente debe ser siempre el enfoque preferido.
5. Se reconoce que el acoso escolar es un problema importante en muchas escuelas y la Asociación para la salud psicosocial de niños y adolescentes de Grecia estableció en 2010 una red nacional para la lucha contra la violencia en las escuelas con objeto de elaborar y aplicar medidas adecuadas de prevención e intervención. El Ministerio de Educación es miembro fundador de esa red y también de la red nacional para la prevención y la eliminación del castigo corporal. La legislación de Grecia impone una prohibición absoluta

al castigo corporal en las escuelas y prohíbe su utilización en la educación y la crianza de los niños en general.

6. Las actividades de los ministerios para prevenir y eliminar la venta de niños son coordinadas por un comité especial establecido en 2004, mientras que de la supervisión de la legislación relativa a lucha contra la trata y del Plan de Acción Nacional para combatir la trata de personas, de 2006, se encarga un grupo de trabajo interministerial establecido en 2008. Posteriormente se estableció un consejo científico central para asumir la responsabilidad general de las iniciativas para prevenir y combatir la victimización de los niños y las infracciones cometidas por menores, así como para realizar tareas específicas como la creación y supervisión de una red nacional de unidades de protección del niño, la coordinación de mecanismos de detección, el funcionamiento de un servicio de asistencia telefónica para la protección del niño y la gestión de datos estadísticos. Se han aplicado medidas especiales, que incluyen la prestación de asistencia jurídica, apoyo psicológico así como ayuda para proporcionar alimentos y alojamiento a los niños víctimas y testigos en procedimientos penales, en particular a los que están expuestos al riesgo de sufrir intimidación, represalia o violencia.

7. Recientemente se ha modificado la legislación relativa a la administración de la justicia juvenil para mejorar y ampliar los aspectos del sistema adaptados a las necesidades de los niños. Con arreglo a las disposiciones revisadas, todos los niños tienen derecho a recibir asistencia jurídica, los menores de 15 años no pueden ser sometidos a detención preventiva, el período máximo de detención en establecimientos penitenciarios es de 10 años, excepto en el caso de determinados delitos particularmente graves, y para los infractores menores de 15 años las únicas sanciones permitidas son las medidas terapéuticas y de rehabilitación. También se han introducido mejoras en el marco legislativo aplicable a las unidades de protección del niño, del Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos, que ofrecen alojamiento, alimentos, tratamiento médico, enseñanza y apoyo psicológico a niños en situación de riesgo privados de un entorno familiar. Se han organizado actividades de formación sobre los derechos del niño y las disposiciones de los tratados pertinentes para miembros de la judicatura.

8. El trato de los niños no acompañados que son extranjeros o víctimas de la trata es objeto de estrecha supervisión y los hijos no acompañados de emigrantes en situación irregular que están en centros de detención son sistemáticamente separados de los adultos hasta que se ha completado la verificación de la edad y el origen. En determinados casos, la legislación de Grecia prohíbe expresamente la expulsión de niños y cuando, a pesar de realizar minuciosas investigaciones, se demuestra que es imposible encontrar a la familia del niño, las autoridades nacionales asumen la tutela temporal. Se han aplicado programas y procedimientos específicos para el retorno de niños no acompañados que no solicitan asilo, entre ellos, para nacionales de Albania, un acuerdo bilateral para la repatriación y rehabilitación de niños víctimas de la trata en Grecia. Cuando la repatriación no es viable o puede exponer al niño a peligros, se ofrece alojamiento en centros especiales. Si los niños no acompañados solicitan asilo, se respetan estrictamente las disposiciones del Reglamento Dublín II y, en estrecha colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las organizaciones no gubernamentales (ONG) competentes y las autoridades de los países vecinos, el servicio de inmigración hace todo lo posible para reunir a los niños con miembros de su familia residentes en otros Estados de la Unión Europea.

9. Las Fuerzas Armadas de Grecia no reclutan a personas menores de 18 años; de conformidad con una enmienda legislativa de 2011 introducida para armonizar la legislación penal interna con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, toda persona que, en un conflicto armado nacional o internacional, enrole o reclute por la fuerza

a niños menores de 15 años o los obligue a participar en hostilidades, está sujeta a una pena de prisión de al menos 10 años.

10. **La Sra. Varmah** (Relatora para el país) dice que cabe encomiar el compromiso sostenido del Estado parte con los derechos del niño, a pesar de la desfavorable situación generada por la crisis financiera. La oradora desea exponer inquietudes y formular preguntas en relación con algunas esferas, comenzando por el hecho de que, al parecer el Observatorio Nacional de los Derechos del Niño ha estado inactivo desde su creación en 2001 y ha hecho poco o nada para promover la aplicación de la Convención. En vista de esta situación, desea saber si el Estado prevé establecer un órgano de coordinación independiente para asumir la función de vigilancia que, según parece, el Observatorio no ha realizado. También agradecería recibir información actualizada sobre la situación del Plan de Acción Nacional para los derechos del niño, sobre las repercusiones de la crisis financiera y los consiguientes recortes del presupuesto destinado a los niños y las familias pobres, así como sobre las consecuencias de las medidas adoptadas para mitigar sus efectos.

11. La oradora observa que no se dispone de un sistema centralizado de recolección y análisis de datos y pregunta si el Estado parte prevé establecer un sistema central de información capaz de ofrecer datos completos y desglosados para comprender y vigilar de forma adecuada la situación de los niños víctimas de abuso y descuido, los niños con discapacidad, los niños pertenecientes a grupos minoritarios, los niños migrantes, los solicitantes de asilo y los niños no acompañados. También resultaría útil saber si el Gobierno prevé aumentar la mayoría de edad de 17 a 18 años en las disposiciones jurídicas pertinentes, entre ellas, los artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal que no se ajustan a la Convención, así como revocar disposiciones que, previo consentimiento de los padres, autorizan el matrimonio de niños y niñas a partir de los 9 y 12 años respectivamente.

12. A pesar de los encomiables esfuerzos realizados a nivel interministerial para mejorar el nivel de vida de los romaníes, siguen existiendo problemas en el ámbito de la aplicación local, entre ellos la persistencia de la segregación en algunas escuelas públicas. Por consiguiente, es necesario recibir información sobre las medidas adoptadas para afrontar la persistente exclusión y discriminación que sufren los niños romaníes y también los niños pertenecientes a las minorías musulmanas de Turquía y Macedonia, los niños con discapacidad y otros niños que necesitan protección especial, en las esferas de la vivienda, la educación y el empleo. En cuanto a los romaníes en particular, la oradora se pregunta si los procedimientos simplificados de inscripción recomendados por el Ombudsman de Grecia en el informe especial de 2009 han permitido lograr la regularización de los niños romaníes que no fueron inscritos en el registro civil al nacer y de los miles de otros romaníes que de hecho son apátridas. La oradora agradecería que se explicara, además, porqué las mujeres migrantes no pueden obtener certificados de nacimiento de sus hijos y porqué las personas de origen turco no están autorizadas a utilizar su nombre completo original en los documentos oficiales y en cambio se ven obligados a aceptar transliteraciones arbitrarias.

13. Por último, solicita información sobre las medidas adoptadas para asegurar que los niños sean escuchados en todos los ámbitos, concretamente en el hogar, la escuela, las instituciones de guarda y los procedimientos judiciales y administrativos, por ejemplo causas de custodia vinculadas al divorcio, desea saber si las reformas legislativas que prohíben el uso de la violencia contra niños se aplican efectivamente y observa que, lamentablemente, prosigue la práctica de los castigos corporales, tanto en el entorno del hogar como en otros entornos, a pesar de las reformas.

14. **El Sr. Pollar** (Relator para el país) pregunta si la sociedad civil, y los niños en particular, han participado en la elaboración del informe, y en qué medida el Gobierno ha difundido y tenido en cuenta las anteriores observaciones finales del Comité. El orador

pregunta cuántos niños han muerto durante el período que abarca el informe a causa de enfermedades, accidentes de circulación o de otro tipo y actos de violencia, o han cometido suicidio, y dice que el Comité desearía escuchar las observaciones de la delegación sobre la elevada tasa de mortalidad de los niños romaníes.

15. El orador desea saber cómo se protege la privacidad de los niños en la familia, en las modalidades alternativas de cuidado y en las instituciones, instalaciones y servicios. También pregunta cómo se protege a las familias y los hogares de los niños de las injerencias arbitrarias o ilegales, cómo se garantiza la privacidad de sus comunicaciones, si tienen derecho a recibir asesoramiento y consejo confidenciales, y qué controles existen para proteger la información personal almacenada en registros o expedientes.

16. El orador pregunta cómo garantiza el Gobierno el acceso a diversas fuentes nacionales e internacionales de información, especialmente las destinadas a promover la salud y el bienestar. Resultaría útil saber qué medidas se están adoptando para alentar a los medios de comunicación a que difundan información de interés para los niños y que se ajuste al artículo 29 de la Convención. Solicita información sobre las iniciativas del Gobierno destinadas a promover la elaboración y difusión de libros para niños, alentar a los medios de comunicación a tomar en consideración las necesidades lingüísticas de los niños pertenecientes a grupos minoritarios, y formular directrices apropiadas sobre la protección del niño respecto de la información y los materiales perjudiciales.

17. **La Sra. Nores de García** dice que al Comité le preocupa que la actual crisis económica tenga una repercusión negativa en los recursos disponibles para la protección de los derechos del niño. La oradora se pregunta en qué medida la población en general, y los grupos vulnerables en particular, conocen la Convención, y si se ha difundido en los idiomas que hablan los migrantes de otros países de la región. Desea saber qué medidas se están adoptando para modificar las pautas culturales perjudiciales mediante la formación de profesionales que trabajan con niños a todos los niveles.

18. **El Sr. Gurán** observa que la falta de coordinación en la esfera de los derechos del niño es un problema de larga data en el país, así como que el Observatorio Nacional de los Derechos del Niño nunca ha funcionado de forma adecuada como órgano coordinador, y pregunta si se prevé reemplazar ese órgano. Habida cuenta de que Grecia, como miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de establecer un órgano independiente para vigilar la aplicación de la legislación relativa a la lucha contra la discriminación, el orador desearía saber si ese órgano existe y, en caso afirmativo, cómo funciona. Pregunta qué recursos se destinan a apoyar la importante labor de la Oficina del Ombudsman en el contexto de la crisis económica actual.

19. El orador desea saber por qué todavía no se ha reconocido a los romaníes como minoría en Grecia, exactamente cuántos romaníes viven en el país, y si se les ofrece la opción de identificarse como tales en las encuestas del censo. Para abordar las cuestiones relativas a los romaníes es preciso realizar actividades de coordinación y aplicar una estrategia clara. Por consiguiente, pregunta si se ha establecido un órgano de coordinación de esas cuestiones y si Grecia tiene el propósito de emular estrategias que se han aplicado con resultados satisfactorios en otros países europeos.

20. **La Sra. Maurás Pérez** expresa preocupación por las consecuencias negativas de la actual crisis económica y social en los niños, y por la falta de datos estadísticos conexos. Los datos disponibles indican que la tasa de desempleo de los jóvenes es actualmente del 40% y sigue aumentando, y que también es mayor el riesgo de caer en la pobreza. La oradora se pregunta si esa situación ha causado el desplazamiento interno de jóvenes en busca de trabajo.

21. Según información recibida por el Comité, el número de niños abandonados va en aumento y los servicios sociales del país están desbordados. Al parecer todavía se favorece

la cogida de niños en instituciones frente a las alternativas basadas en la familia. Un gran número de jóvenes no se ha matriculado nunca en la escuela ni ha tenido un empleo remunerado. La oradora desea saber qué políticas anticíclicas concretas, en forma de aumento del gasto social, se están aplicando para estimular el crecimiento del empleo. También pregunta qué porcentaje del presupuesto nacional se asigna a la salud y la educación, y si se han establecido programas para prever transferencias de efectivo a los grupos de población más desfavorecidos. Sería útil, además, recibir información sobre el Fondo económico y social. Por último, pregunta si los servicios de salud mental para niños y jóvenes siguen recibiendo fondos suficientes.

22. **El Sr. Kotrane** pregunta si el Estado parte está estudiando la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

23. El Comité estima que las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal mencionadas en el párrafo 6 de la lista de cuestiones (CRC/C/GRC/Q/2-3) no deben interpretarse en el sentido de que los niños deben ser tratados como adultos en los procedimientos penales. El orador confía en que esas disposiciones se revisen para garantizar que eso no suceda.

24. El orador observa que el Estado parte indicó que tendría en cuenta los deseos de la minoría musulmana de Tracia en relación con la aplicación de la *sharia* y pregunta si también se tendrán en cuenta los deseos de los niños musulmanes. A los niños se les pide que indiquen su filiación religiosa al matricularse en la escuela, práctica que viola el derecho a la libertad de religión según la Autoridad helénica para la protección de los datos y el Ombudsman. Por consiguiente, desea saber qué medidas se han adoptado con objeto de asegurar el respeto de la libertad de religión en las escuelas.

25. **El Sr. Koompraphant** pregunta qué medidas se han adoptado para ayudar a los docentes a detectar casos de violencia doméstica y a notificarlos al ministerio público. También pregunta a través de qué vías pueden intervenir posteriormente los fiscales, de qué recursos disponen, y cuántos están asignados a casos de violencia doméstica. Por último, desea saber qué medidas se están adoptando para eliminar la hostilidad hacia los niños romaníes y sus familias.

26. **La Sra. Al-Asmar** desea saber qué relación existe entre el Gobierno y las ONG, y observa que algunas ONG, en particular las que trabajan en la esfera de la trata de personas, han señalado que tropiezan con dificultades en sus gestiones con órganos gubernamentales.

27. **La Sra. Ms. Al-Shehail** expresa preocupación por los constantes malos tratos que infligen agentes de la policía a miembros de grupos vulnerables, en particular los romaníes, y pregunta si se ha adoptado alguna medida para luchar contra el abuso de poder y para integrar a las minorías en el cuerpo de policía. La oradora solicita más datos estadísticos sobre los niños de la calle y el empleo de niños en el sector estructurado. Pregunta qué medidas se han adoptado para reducir el número de jóvenes que realizan trabajos inapropiados, como la venta de drogas. Al parecer no existe un apoyo estructural público para los niños no acompañados o las familias que carecen de documentos legales. Por último, pregunta si se dispone de un código de conducta para regular la industria de la televisión o de algún programa de formación destinado a los medios de comunicación sobre el respeto de la privacidad de los niños.

28. **La Sra. Wijemanne** pregunta qué criterios aplica el Gobierno al establecer prioridades para hacer efectivos los derechos del niño. También pregunta si el Observatorio Nacional de los Derechos del Niño ejercerá en el futuro funciones de coordinación, habida cuenta de que se necesita un plan de acción para proteger los derechos del niño. Sería

interesante que se expusieran las actividades realizadas para reforzar la base de datos sobre cuestiones relacionadas con los derechos del niño en distintas esferas, como la salud, la educación, los abusos sexuales y los grupos minoritarios.

29. La oradora pregunta qué medidas se están adoptando para proteger a los niños que carecen de certificados de nacimiento y para garantizar que no sean tratados como adultos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por último, pregunta como prevé el Gobierno hacer frente a la discriminación contra los romaníes, en particular respecto del acceso a la escuela y a la documentación legal.

30. **El Sr. Gastaud** desea saber qué mecanismos se han establecido para compilar y comparar los datos reunidos en todo el país con objeto de ofrecer una visión general de la situación de los derechos del niño. También pregunta qué medidas se han adoptado para asegurar que los niños puedan ser escuchados en los procedimientos penales, y si existen vías de recurso para anular una decisión judicial en casos en que no se hayan escuchado.

31. El orador solicita más información sobre el Parlamento de los Jóvenes, en particular la duración del mandato de sus miembros y sus competencias, y desea saber si formulan opiniones y propuestas, y, en caso afirmativo, el curso que se les da.

32. **La Sra. Lee** dice que la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Sra. Gay McDougall, indicó en el informe de su misión a Grecia en 2008 que los romaníes de los asentamientos que visitó vivían en alojamientos que no cumplían los requisitos de habitabilidad, sin servicios de saneamiento o de suministro de agua y electricidad, y que ninguno de los niños del asentamiento de Spata estaba matriculado en la escuela. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictaminado que la práctica discriminatoria de denegar la matriculación en la escuela a los niños romaníes o requerir que asistan a clases preparatorias constituye una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para corregir esta situación?

*Se suspende la sesión a las 11.20 horas y se reanuda a las 11.40 horas.*

33. **El Sr. Kastanas** (Grecia) dice que el informe ha sido elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en estrecha colaboración con más de otros diez ministerios que participan en la protección de los derechos del niño. Posteriormente se remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Oficina del Ombudsman y a seis ONG, cuyas observaciones se incorporaron cuando fue pertinente. Las observaciones finales formuladas por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos han sido objeto de amplia difusión a todos los departamentos competentes y se han publicado en diversos sitios web del Gobierno. Grecia todavía está estudiando la posibilidad de ratificar algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el nuevo Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, pero la labor se ha visto dificultada por la crisis económica.

34. El orador hace referencia a una observación anterior y subraya que Grecia no reconoce en su territorio a un grupo específico, nacional, étnico o lingüístico, denominado "macedonio". El término "macedonio" lo utilizan en un sentido cultural y regional los más de 2,5 millones de griegos macedonios que viven en el norte del país; el hecho de atribuir otro significado a esa palabra solo induce a confusión. Un pequeño grupo de personas que viven en Macedonia, una región de Grecia, hablan tanto griego como un dialecto eslavo, pero sus derechos humanos están plenamente protegidos en virtud de la Constitución, no sufren discriminación sobre la base de su origen y tienen libertad para conservar sus tradiciones y cultura.

35. En cuanto a la transliteración de los nombres, dice que todos los documentos oficiales se redactan en griego y que los nombres extranjeros se inscriben en los certificados del estado civil con los alfabetos griego y latino. La ortografía de los nombres extranjeros y su entonación adecuada en griego se basan en una declaración oficial de la persona interesada, mientras que para orientar la transliteración del alfabeto griego al latino y viceversa se aplica un modelo lingüístico elaborado por la organización helénica de normalización. Toda divergencia en la ortografía de nombres extranjeros debe a la aplicación de ese modelo y no afecta solamente a la minoría musulmana.

36. El orador dice que la legislación de Grecia prevé la aplicación de la *sharia*, pero solo en asuntos familiares y de sucesión, y los musulmanes pueden elegir libremente entre los *muftis* o los tribunales civiles. La *sharia* se aplica en la medida en que sus disposiciones no entran en conflicto con la legislación y los valores fundamentales de Grecia. En decisiones judiciales recientes se ha determinado que las disposiciones que establecen la competencia judicial de los *muftis* son excepcionales y no pueden ser objeto de una interpretación amplia. Las cuestiones relacionadas con la custodia, la tutela y el comportamiento de los padres son competencia exclusiva de los tribunales civiles. No obstante, esa dualidad plantea problemas y el Gobierno es consciente de que es necesario reforzar la revisión judicial de las decisiones que dictan los *muftis* con objeto de garantizar que estén de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. También está dispuesto a estudiar modificaciones de la legislación y del sistema judicial para tomar en consideración las situaciones locales y el interés superior del niño. El orador hace hincapié en que no existe un ordenamiento jurídico paralelo en Grecia y en que las mujeres y los niños musulmanes están plenamente incluidos en todas las políticas y programas.

37. **La Sra. Nores de García** pregunta cómo armoniza el Estado parte el hecho de que los matrimonios precoces estén prohibidos en virtud de la Convención pero sean una práctica habitual en determinados grupos minoritarios.

38. **El Sr. Kastanas** (Grecia) confirma que los romaníes celebran matrimonios precoces, pero que los matrimonios de niños menores de 14 años tienen que ser autorizados por los tribunales.

39. **El Presidente** dice que obviamente existe un ordenamiento jurídico paralelo en relación con el matrimonio si se permite que los niños se ajusten a una legislación diferente. El orador pregunta cuántas decisiones de tribunales de la *sharia* han revocado los tribunales civiles.

40. **El Sr. Kastanas** (Grecia) dice que las derogaciones de la edad mínima para contraer matrimonio son aplicables por igual a los niños de todos los orígenes étnicos y religiones. Los tribunales no suelen revocar las decisiones emitidas por *muftis*, lo que explica la disposición del Gobierno a introducir cambios legislativos con objeto de mejorar el mandato de los tribunales civiles para la revisión judicial.

41. **El Presidente** dice que la edad mínima para contraer matrimonio es extremadamente baja y que las cuestiones relativas a los romaníes y a los musulmanes plantean dos problemas distintos.

42. **La Sra. Varmah** señala que la autorización de los matrimonios precoces por los tribunales no impedirá que surjan problemas entre la pareja.

43. **El Sr. Kastanas** (Grecia) dice que tal vez sea necesario examinar de nuevo la cuestión de los matrimonios precoces, pero que en Grecia no son una práctica generalizada.

44. **La Sra. Toura** (Grecia) dice que la Secretaría General para la Juventud del Ministerio de Educación, Formación Continua y Culto está buscando candidatos para los puestos de expertos en derechos del niño y para constituir un comité asesor integrado por representantes de ONG. Se ha fijado el plazo de mediados de junio de 2012 para la



presentación de solicitudes. El objetivo es establecer el Observatorio Nacional de los Derechos del Niño como institución clave para la vigilancia de los derechos del niño y la aplicación de la Convención.

45. **La Sra. Nores de García** pregunta si se mantendrán las anteriores funciones del Observatorio Nacional o se modificarán. También solicita información sobre la naturaleza de su mandato de supervisión, los pasos que seguirá para garantizar el cumplimiento de la Convención y el presupuesto que se le asignará.

46. **La Sra. Toura** (Grecia) dice que el Observatorio Nacional mantendrá todas sus funciones originales, y las nuevas responsabilidades se determinarán en el marco de la situación actual del país.

47. **El Presidente** expresa dudas sobre la eficacia del Observatorio Nacional. Dice que su composición corresponde más a un centro de estudio que a un órgano de coordinación, mientras que el Estado parte carece de un mecanismo de aplicación y de una coordinación tanto horizontal, entre los diversos ministerios, departamentos y la sociedad civil, como vertical, entre el Gobierno, las regiones y los municipios. El orador desea conocer con exactitud cuáles son las competencias del Observatorio Nacional y cómo prevé coordinar el Estado parte la aplicación de la Convención.

48. **La Sra. Toura** (Grecia) dice que se espera que todas las entidades y actividades relacionadas con la protección del niño se concentren en el Observatorio Nacional cuando se establezca de nuevo.

49. **El Sr. Giannakopoulos** (Grecia) dice que el Consejo Científico Central coordina todos los programas destinados a los niños en conflicto con la ley, con miras a crear una nueva red nacional de protección del niño. Se ha incorporado una nueva línea presupuestaria para la reunión de datos.

50. **El Sr. Kofinas** (Grecia) dice que el Consejo Científico Central está integrado por cinco miembros que representan al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud y Solidaridad Social y al Centro nacional para la solidaridad social. El mandato del Centro nacional es coordinar las actividades destinadas a la protección de los niños en conflicto con la ley, elaborar cursos de formación para los trabajadores sociales municipales, establecer normas para las modalidades alternativas de cuidado, prestar asistencia cuando un niño se encuentra en peligro inminente y establecer vínculos con la fiscalía. El Centro nacional también administra dos albergues para mujeres y niños víctimas y se ha previsto crear otros seis en un futuro próximo. Las prestaciones del servicio nacional de asistencia telefónica abarcan desde la atención de las necesidades básicas hasta el apoyo psicosocial. A pesar de la crisis económica, el Gobierno se está esforzando por mantener los servicios sociales y ha destinado fondos a diversos centros de atención de la salud, instalaciones para personas con discapacidad, residencias para las personas de edad, campamentos de verano y subsidios para familias numerosas.

51. **El Presidente** pregunta si el Gobierno ha podido aportar recursos suficientes para la atención de la salud, la educación y la protección social, y si ha adoptado medidas estructurales para hacer frente a la tasa extremadamente elevada de desempleo de los jóvenes.

52. **La Sra. Nores de García** desea saber qué porcentaje del presupuesto nacional se asigna a los sectores de la salud y la educación en circunstancias normales, en comparación con el porcentaje asignado a esos sectores durante la crisis económica.

53. **La Sra. Toura** (Grecia) dice que la garantía del acceso a la educación en el presente abre la posibilidad de que más jóvenes encuentren empleo en el futuro. A pesar de las consecuencias negativas de la crisis económica en el sector de la educación, Grecia ha seguido esforzándose por garantizar el acceso a la educación de los niños de grupos

sociales vulnerables. El Ministerio de Educación ha adoptado una serie de medidas encaminadas a mantener la calidad de la educación dentro de los límites de los recursos disponibles. Esas medidas han incluido la fusión de escuelas que contaban solo con un reducido número de alumnos o de escuelas que estaban muy cercanas a otras, así como la construcción de nuevas escuelas más amplias, mejor equipadas y que ofrecen mayor diversidad de cursos.

54. El establecimiento de zonas de prioridad educativa es una iniciativa para combatir la segregación en las escuelas y retirar los obstáculos sociales y económicos que impiden el progreso de los alumnos aplicando enfoques alternativos de la educación. Las escuelas ubicadas en esas zonas también emplearán a personal especializado, como psicólogos y trabajadores sociales.

55. Además, el Ministerio de Educación está estudiando la posibilidad de ofrecer almuerzos ligeros a todos los alumnos de determinadas escuelas, y en marzo de 2012 publicó una circular en la que se pedía a la población que apoyara a los alumnos que no disponían de alimentos suficientes. Las familias de bajos ingresos pueden recibir un subsidio anual por cada niño que esté matriculado en una escuela pública y esté recibiendo la enseñanza obligatoria.

56. **La Sra. Varmah** observa con interés que en Grecia no existen agencias de adopción privadas. Dice que las adopciones privadas suelen realizarse por conducto de abogados o ginecólogos que desempeñan las funciones de facilitador y el proceso suele ser más rápido que el de las adopciones públicas. No obstante, en el caso de las adopciones privadas se requiere un fallo judicial. Según informaciones recibidas, en 2005 se realizaron en Grecia aproximadamente 500 adopciones ilegales, la mayoría bajo la cobertura de adopciones privadas. Al parecer, los niños incluidos en el marco de modalidades alternativas de cuidado y los hijos de emigrantes y solicitantes de asilo corren mayor riesgo de ser adoptados de forma ilegal. A ese respecto, se ha comunicado al Comité que algunas madres búlgaras y albanesas venden sus hijos a padres griegos y, de esa manera, evitan los procedimientos legales pertinentes. Se supone que esos bebés son posteriormente objeto de trata con fines de adopción ilegal. La oradora pregunta qué medidas legales ha adoptado el Gobierno para luchar contra la práctica de la adopción ilegal en todas sus formas.

57. La oradora expresa preocupación porque la mayoría de los niños con discapacidad no asisten a la escuela, a pesar de que la enseñanza es obligatoria para todos los niños desde el jardín de infancia hasta la escuela secundaria. Esa baja tasa de asistencia puede atribuirse al hecho de que la mayoría de las escuelas no están suficientemente equipadas y carecen de docentes capacitados. Desea saber qué medidas ha adoptado el Gobierno para resolver esta situación y garantizar el acceso a una educación de calidad para la comunidad de habla turca en Tracia Occidental, así como para otras minorías y grupos vulnerables. La oradora pregunta si los docentes pertenecientes a esos grupos han recibido una formación adecuada y si su número es suficiente para enseñar en su propio idioma a los estudiantes en los niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. También desea saber qué medidas se han adoptado para erradicar la discriminación contra los niños romaníes, que a menudo encuentran dificultades para acceder a la educación. Agradecería recibir información sobre las iniciativas adoptadas para evitar que los niños romaníes, tras ser admitidos en una escuela, no sean separados de los demás, y para evitar el abandono escolar.

58. Además, desea saber qué medidas se han adoptado para luchar contra la prevalencia del consumo de alcohol entre los jóvenes y cuántos han seguido un tratamiento de desintoxicación.

59. Por último, pregunta si el Gobierno prevé crear un servicio nacional gratuito de asistencia telefónica durante las 24 horas del día para niños en situaciones difíciles.

60. **El Sr. Pollar** dice que el informe del Estado parte no contiene información sobre los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Pregunta de qué modo ha resultado útil para el Estado parte en la lucha contra ese fenómeno la Convención sobre los aspectos civiles del secuestro internacional de niños, y si se dispone de datos sobre el número de niños recuperados por Grecia y que han regresado a ese país y el número de niños recuperados por Grecia y repatriados.

61. El orador observa con satisfacción que en Grecia no existen conflictos armados y pregunta si existe algún medio para identificar a niños que hayan participado en un conflicto armado en otro país y cuáles son las medidas aplicadas para rehabilitarlos.

62. El orador hace referencia al artículo 31 de la Convención, que reconoce el derecho del niño al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, y pregunta qué servicios ha previsto el Estado parte para permitir que los niños ejerzan ese derecho y si los niños, a parte de los estudios, disfrutan de tiempo suficiente para ello.

63. **La Sra. Nores de García** dice que si los estudiantes no conocen sus derechos es lógico que no estén en condiciones de ejercerlos: ¿cómo se han difundido los principios de la Convención entre los estudiantes en Grecia?

64. Se ha informado al Comité de que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por integrar a los grupos minoritarios en el sistema educativo, muchos niños romaníes todavía encuentran dificultades para acceder a la educación. La oradora expresa su preocupación porque al parecer existen escuelas a las que solo asisten niños romaníes, lo que indica su exclusión total de la sociedad. Desea saber qué medidas prevé adoptar el Gobierno para hacer frente a esa situación. Además, señala que muchas comunidades romaníes no pueden llegar a las escuelas debido a la falta de transporte.

65. La oradora subraya la importancia de la educación en la primera infancia y expresa preocupación por la evidente falta de servicios al respecto en las comunidades romaníes. Desea conocer las medidas previstas para garantizar que los niños romaníes reciban educación desde la más temprana edad. Además, pregunta qué cuidados reciben los niños no acompañados, si los centros que los acogen están bien equipados para atender sus necesidades en materia de salud y educación y qué medidas se han aplicado para su reintegración. La experiencia adquirida recientemente por el Gobierno ha servido para poner de relieve la necesidad de disponer de políticas sobre los niños de la calle que estén bien diseñadas y sean objeto de una supervisión adecuada. A la oradora le interesa saber si se han introducido cambios en esas políticas.

66. **La Sra. Koompraphant** solicita información sobre los servicios de asistencia a las familias que tienen problemas relacionados con la responsabilidad parental y la protección del bienestar de sus hijos.

67. **El Sr. Cardona Llorens** observa con preocupación la falta de datos sobre el número de niños con discapacidad desglosados por edad y tipo de discapacidad. Desea saber qué medidas se han adoptado para reunir esos datos. En cuanto a la cuestión de la atención de la salud, dice que se ha comunicado al Comité que algunas compañías privadas de seguros niegan el tratamiento a los niños con discapacidad alegando que es responsabilidad del Estado. No se sabe con claridad cuántos niños han sido acogidos en instituciones, pero se ha informado al Comité de que los tribunales de familia no examinan la situación de algunos niños con discapacidad tras ser acogidos en una institución. Además, el programa destinado a retirar a niños de esas instituciones, establecido por el Ministerio de Salud y Solidaridad Social, al parecer no hace referencia específica a los niños con discapacidad.

68. El orador recuerda la importancia de la detección precoz de la discapacidad y pregunta si existen centros especializados en ese tipo de detección y, en caso afirmativo, cuántos hay y cómo funcionan.

69. **El Sr. Gastaud** observa las mejoras realizadas por el Gobierno en la esfera de la justicia juvenil —en particular, el aumento de la edad de responsabilidad penal a los 18 años— y dice que persisten ciertas ambigüedades. Pide que se aclare si los niños menores de 15 años pueden ser encarcelados y si ese es también el caso de los niños de entre 15 y 18 años, habida cuenta de que son menores de edad. Observa asimismo que los tipos de penas impuestos a los menores infractores al parecer varían en función de su edad y pregunta qué penas se imponen a los menores de 15 años que han cometido un delito grave. El orador recuerda que los niños solo deben ser encarcelados como último recurso y solicita información sobre las medidas alternativas disponibles para hacer frente a la delincuencia juvenil en el Estado parte.

70. Además, se ha informado al Comité de que en algunos centros de detención es habitual recluir a los niños con los adultos. Pregunta qué medidas ha previsto adoptar el Gobierno para corregir esa situación.

71. **La Sra. Lee** dice que se ha informado al Comité acerca del uso de camas jaula en un centro de atención para niños con discapacidad. Desea saber qué medidas está adoptando el Gobierno para hacer frente a esa situación, si hay otros centros que habitualmente sedan y someten a restricción a los pacientes, y si el Estado Parte tiene el propósito de ratificar la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

72. La oradora observa que actualmente hay tres ministerios que se encargan de las cuestiones de asilo y se pregunta si existe suficiente coordinación entre ellos. Además, expresa inquietud por las condiciones de detención de los niños, en particular de los no acompañados, en los centros donde están retenidos. La oradora desearía saber si se utilizan técnicas adaptadas a los niños en las entrevistas y la forma en que el Gobierno toma en consideración el interés superior del niño durante el proceso de asilo y la repatriación.

73. **El Sr. Gurán** dice que el número de niños acogidos en instituciones en Grecia es motivo de gran preocupación. Desea saber si el Gobierno ha formulado una estrategia para reducir el número de niños acogidos en instituciones, si estudiará la posibilidad de cerrar las instituciones más grandes y qué medidas se han adoptado para promover modalidades alternativas de cuidado en el entorno familiar y, en particular, la acogida en hogares de guarda.

74. **El Presidente** dice que, según el informe del Estado parte, la edad mínima de responsabilidad penal se ha fijado en 8 años y los niños de entre 8 y 13 años no pueden ser encarcelados. Sin embargo, según la delegación, esa práctica también se aplica a los niños menores de 15 años y pide a la delegación que confirme esas edades. El orador observa que en esos casos solo pueden imponerse medidas educativas y terapéuticas y pregunta si esas medidas impiden el ingreso de los niños en un centro de detención.

75. El orador aborda de nuevo la cuestión de la detención preventiva y señala que los niños en conflicto con la ley tienden a ser inmigrantes o romaníes y con frecuencia están detenidos durante largos períodos debido a las prolongadas investigaciones que se han de llevar a cabo. Pregunta dónde están detenidos esos niños y si están junto a los adultos.

76. El orador también expresa preocupación por la escasez de profesionales debidamente formados en las esferas pertinentes y pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para remediar esa escasez. Además, se pregunta por qué tan pocos jueces han recibido formación especializada sobre los derechos del niño, a pesar de que existen numerosos servicios de formación.

77. El orador observa con preocupación que existe una tendencia cada vez mayor a acoger a los niños vulnerables en instituciones y pregunta qué medidas ha adoptado el Gobierno para encontrar opciones alternativas.

*Se levanta la sesión a las 13.00 horas.*